

POLÍTICAS SOCIALES Y VIOLENCIAS HACIA LAS Y LOS NIÑOS Y JÓVENES EN ARGENTINA

Valeria Llobet
Marina Medan

RESUMEN

En este artículo proponemos una reflexión acerca de los modos en que se traman -conflictivamente- procesos de violencia social e institucional con configuraciones de vulnerabilidad realizadas por políticas y programas destinados a la inclusión social de niños, niñas, y jóvenes. Sostenemos que si bien en los últimos años parecen haber ascendido las prácticas violentas -especialmente estatales, pero también sociales- destinadas al control social de las infancias y juventudes pobres, el Estado también se presenta en los territorios procurando estrategias tendientes a la inclusión social. El argumento se sostiene en base a datos producidos en investigaciones empíricas recientes llevadas a cabo en el Gran Buenos Aires, y en informaciones de fuentes secundarias.

PALABRAS CLAVE: Políticas sociales, violencia institucional, jóvenes, Argentina, inclusión social

ABSTRACT

In this paper we reflect upon the ways in which processes of social and institutional violence are merged with the vulnerability configurations produced within policies and programs which target social inclusion of children and youth. Although in recent years violence against children and youth coming from some State areas such the police, seem to have increased, we argue that other areas of the State also deployed social inclusion strategies. The argument is based on empirical data produced in a recent research conduc-

ted in Buenos Aires, and in secondary sources information.

KEYWORDS: Social policies, institutional violence, youth, Argentina, social inclusion

INTRODUCCIÓN

En este trabajo reflexionaremos de manera preliminar sobre algunas aristas de las complejas vinculaciones entre procesos de violencia social y la regulación de población infantil y juvenil. Para ello, pondremos en relación algunos datos provistos por fuentes secundarias sobre violencia institucional hacia jóvenes con otros construidos en tres investigaciones propias sobre políticas y programas de inclusión social destinados a niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

La investigación social en Argentina viene señalando que a partir de la crisis de 2001 / 2002, en los sectores populares, se aceleraron procesos de territorialización (Merklen, 2005; Svampa, 2003) a partir de las nuevas orientaciones de las políticas sociales, y vinculados con la pérdida de la centralidad organizadora del trabajo. En este contexto, la incierta categoría del joven “ni ni”, la figura del excluido por excelencia, adquirió relevancia en la definición de programas y políticas sociales que, con una marcada vocación territorial, se orientaron a promover la inclusión de estos sujetos, o bien evitar su inclusión en redes delictivas. Así, los barrios populares vieron emerger progresivamente Casas de la Juventud, talleres culturales, Centros de Actividades Juveniles, programas de prevención del delito, y más adelante Servicios Locales de Protección de Derechos. A estos espacios se sumó, además, la consolidación del trabajo de organizaciones locales y la reorientación del movimiento piquetero hacia actividades barriales.

A su vez, esta trama heterogénea y densa de intervenciones directamente estatales y otras vinculadas al estado se enfrenta en los barrios a la cara policial del mismo Estado. La primera procura establecer zonas de neutralidad en las cuales oponer protección y mediaciones sociales a la creciente criminalidad que parece asolar a los barrios populares. Esta imagen de tensión y disputa entre las políticas de inclusión y las prácticas punitivas por el gobierno del territorio y los sujetos infantiles y juveniles, rechaza la imagen presentada por estudios que maximizan la visibilidad de una de ellas (punitiva) por sobre

la otra (de inclusión social).¹ Aún así, resultaría simplista presentar el problema de la violencia social que cobra sus víctimas entre jóvenes, niños y niñas de sectores populares, como una simple disputa entre proyectos estatales o para-estatales en competencia por el territorio.

En diversas oportunidades hemos señalado la centralidad del escenario estatal en la determinación de formas de reproducción de las desigualdades sociales vinculadas con los procesos de clasificación de poblaciones infantiles y juveniles (Llobet, 2013). No obstante la validez general de esa afirmación, parece necesario desplazar la mirada hacia los márgenes sociales y territoriales del estado, para considerar los modos en que dinámicas y prácticas sociales dan forma a las prácticas políticas, regulatorias y disciplinarias del propio estado (Das y Poole, 2004). Esto es, “el Estado” es reconstruido en sus márgenes por la multitud de actores sociales que con sus prácticas redefinen los alcances de la legalidad y desdibujan un trazado taxativo entre legal / ilegal. Asimismo, es configurado por las prácticas de los propios agentes estatales, que procuran alterar los sentidos que adquiere la justicia (en su doble vertiente, de justicia social y de institución estatal) tanto para ampliar los márgenes de inclusión, como para construir sujetos sociales excedentes. En otras palabras, el Estado actúa diversos papeles en el despliegue de diferentes violencias y frente a variados actores: “los vecinos” que linchan a los jóvenes, los medios de comunicación que legitiman la justicia por mano propia o construyen la peligrosidad y otredad de una de las víctimas, a la sazón “el criminal” o “la amoral”, y también frente a las redes de economías ilegales,

¹ Por ejemplo, en un reciente trabajo Javier Auyero y María Fernanda Berti (2013) se preguntan “cómo, cuándo y produciendo qué efectos es que el Estado interviene en las disputas de los más pobres en los lugares en los que éstos viven?” (2013: 119). Los autores sostienen que, lejos advertirse una ausencia estatal, es observable un particular tipo de presencia del Estado que toma forma en una colusión entre policía y criminalidad, promocionando y perpetrando la violencia. Ellos sostienen que la misma policía que libera zonas es la que aterroriza otras áreas, protege a algunos (usualmente delincuentes) y persigue a otros. Los autores afirman la presencia del Estado en la regulación de la violencia de este modo: “La violencia es el efecto de una compleja cadena causal cuyos orígenes se encuentran en las acciones e inacciones del Estado, como también en la economía” (Auyero y Berti, 2013:140). Auyero y Berti no logran ver en su etnografía aquel Estado que debería regular las disputas entre las personas (2013:139). Es sorprendente porque gran parte de los datos que ellos construyen fueron producidos en la escuela pública y estatal donde Berti es maestra; incluso, parte de los datos analizados, sobre la violencia que se vive en el territorio, se obtiene a partir de propuestas de la maestra a sus alumnos/as para que describan el barrio en el que viven y expresen sus temores y deseos. Posiblemente, respecto de proteger las propias vidas de las balaceras cotidianas, sea muy poco lo que la escuela pueda hacer, pero no parece tan insignificante como para invisibilizar ese espacio como parte de las intervenciones estatales en el territorio. Es probable, además que haya otras instituciones estatales en esos territorios que accionen en pos de ciertas protecciones hacia las personas (salas de salud, servicios locales de protección de derechos, programas sociales estatales diversos que funcionan en estas instituciones, y también en conjunto con organizaciones sociales establecidas en el territorio). Suponiendo que nos equivoquemos, la escuela, al menos, existe y es invisibilizada en el análisis. (Medan, en prensa).

especialmente vinculadas con el narcotráfico (aún en su forma de “narcome-nudeo”) que regulan los territorios con la miopía o complicidad de la policía.

A partir de este estado de situación, en primer lugar presentamos un conjunto de datos de fuentes secundarias y propios que procuran reponer los contextos sociales de los programas mencionados. En otras palabras, describir el escenario en el que se imbrican pretensiones de seguridad selectiva, control territorial, regulación de la juventud, y violencia institucional. En segundo lugar, reconstruimos cómo ciertos procesos vinculados con situaciones de vulnerabilidad son captados y procesados por políticas y programas sociales. Concretamente, procuramos hacerlo atendiendo a las formas específicas en que las desigualdades de género, etarias, de clase, étnicas, se expresan como vulnerabilidades selectivas en circunstancias clave y en vinculación con los programas estatales.

Para ello, exploraremos las interpretaciones sobre la vulnerabilidad de niños, niñas y jóvenes que emergen de las prácticas institucionales en tres programas que responden a sendos tipos de políticas. La primera, una de inclusión social – específicamente, una de las implementaciones del programa Envión emplazado en una villa del noroeste del Gran Buenos Aires; la segunda, una política de protección de derechos -el Servicio Local que funciona en una villa de la zona norte del Gran Buenos Aires; y la tercera, un programa de prevención del delito juvenil implementado en una villa en el sur del Gran Buenos Aires.²

Por su parte, estas vulnerabilidades que las políticas y programas interpretan, tienen eventualmente expresión en procesos sociales tales como la mortalidad de niños, niñas y jóvenes por causas violentas o su específica captación por parte de los sistemas punitivos de manera diferenciada entre varones y mujeres.

VIOLENCIA INSTITUCIONAL Y REGULACIÓN DE JUVENTUDES POBRES

En los barrios populares de todo el país se han incrementado las interven-

² Los datos de los que se nutre este artículo surgen principalmente de tres investigaciones: a) del proyecto “La protección de derechos de niños, niñas y adolescentes y las interpretaciones del “bienestar de la infancia”: disputas e interacciones en la construcción de los Sistemas locales de protección de derechos”, PICT 2012-2014, n°2281, dirigido por Valeria Llobet; b) del proyecto “La participación de las/os adolescentes en los programas de inclusión social y las identidades de género”, PIP 2010-2012, n° 11220090100520, dirigido por Valeria Llobet; c) del proyecto doctoral financiado por el CONICET de Marina Medán “Prevención del delito con transferencias condicionadas de ingresos: negociaciones entre un programa social y jóvenes de sectores populares”.

ciones de seguridad con base territorial en las que se despliegan distintas formas de hostigamiento y apremios ilegales a sus habitantes, con especial énfasis en niños, niñas y jóvenes. Las detenciones por “averiguación de identidad” en la provincia de Buenos Aires se han triplicado entre los años 2002 y 2009 (CELS, 2011), categoría que se vincula con la disposición arbitraria de la policía, que muchas veces se acompaña de apremios ilegales y formas de tortura. Según el informe de Correpí 2003 – 2013, se cuentan en 2300 las muertes por “gatillo fácil”, esto es, producto del accionar policial. Para el período 2002 – 2010, no obstante, el informe de derechos humanos del CELS consigna 950 casos. Según el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, los casos de tortura y malos tratos vinculados con el servicio penitenciario ascienden, en el 2013, a 1151 casos, casi el 61% de los cuales se concentra en la franja etaria de 22 a 34 años, seguido por el 18% entre 18 y 21 años.

Muchos casos de hostigamiento y abuso de poder que culminan con un homicidio se vinculan con el reclutamiento forzado de jóvenes para la participación en redes ilegales regenteadas por la policía, siendo un caso paradigmático de este tipo la desaparición y asesinato de Luciano Arruga, cuyo cuerpo estuvo desaparecido durante cinco años.³ A su vez, la presencia territorial policial o de las fuerzas de seguridad en los barrios populares no se da exclusivamente a través de la intimidación y hostigamiento a jóvenes varones. También se da a partir de la ausencia de respuesta cuando es convocada, como por ejemplo, en el caso Kevin. A pesar de haber una garita de Prefectura a pocos metros, el personal de las fuerzas de seguridad aseguró no escuchar el tiroteo de más de tres horas que culminó con el asesinato del niño que procuraba protegerse en el interior de su casilla de la Villa 21-11-14 (<http://la-poderosa.org.ar/?p=10373>). También se expresa en la convivencia con redes delictivas y la “liberación de zonas” permitiendo a las mismas realizar delitos o “ajustes de cuentas”, como en el asesinato de Enzo Ledesma. El adolescente fue baleado por “tranzas”⁴ en José León Suárez, y ante la evidente inacción policial, los vecinos del barrio quemaron la comisaría (<http://www.lanacion.com.ar/1634382-exigieron-justicia-por-el-homicidio-de-un-adolescente-en-la-villa-la-carcova>).

Finalmente, la presencia territorial policial se manifiesta en razzias, alla-

³ Luciano Arruga era un adolescente de sectores populares asesinado por la policía luego de que se negara a participar en redes delictuales regenteadas por la misma Policía Bonaerense. Su cuerpo estuvo enterrado como NN durante cinco años.

⁴ “Tranza” alude a los coordinadores barriales del tráfico de drogas.

namientos y grandes operativos en los que los abusos, el trato violento y el “plantado” de pruebas⁵ tiene lugar. En una actividad de una de las investigaciones en que se inspiran estas reflexiones, jóvenes asistentes al programa de inclusión social señalaron, al ver un capítulo del programa televisivo “Policías en Acción”: “acá la policía no entra así, te rompen todo, te plantan droga”. Por su parte, las muchachas presentes en la actividad señalaron que el personal policial o militar en el barrio se dirige a ellas mediante intimidaciones con contenido sexual, de manera coincidente con lo hallado por el CELS (2011). A su vez, las jóvenes son víctimas diferenciales de violencia de género. En su informe sobre Femicidio 2008-2013, La Casa del Encuentro consignó 1223 femicidios y 1520 asesinatos de hijos e hijas de las víctimas del femicidio. Del total de víctimas primarias, el 10% contaba entre 13 y 18 años, y el 32% entre 19 y 30 años.

La presencia de las fuerzas de Gendarmería y Prefectura en el marco del *Plan de Abordaje Integral Territorial de Barrios*, cuyo propósito excede el ámbito de la seguridad para presentarse como un plan de territorialización de diversas agencias estatales, representa muchas veces un conflicto para las organizaciones sociales y las políticas de inclusión y protección de derechos. Esto, porque niños, niñas y jóvenes son un blanco privilegiado de intervención, y a la vez la presencia de estas fuerzas no parece impactar sustantivamente en la reducción de la venta de drogas. Como señalara una trabajadora de una organización de la sociedad civil de uno de los barrios en los que se hicieron las investigaciones, “*es fuerte ver a la Gendarmería palpando de armas a nenes de 7 años*”. No obstante, muchas y muchos vecinos saludaron la intervención militar como una posible “pacificación”.

En efecto, la colisión entre las múltiples estrategias municipales, provinciales o nacionales de inclusión social y las prácticas policiales o militares en los barrios, constituye una tensión que da cuenta de diversas prácticas de redefinición de propósitos y estrategias, pero también de alcance de las ideas de derechos e inclusión, llevadas adelante en los programas. Así, las fluctuaciones en los tipos de intervención policial o militar en los barrios es en algunos casos acompañada por cambios en las estrategias de inclusión o protección de derechos.⁶ Por ejemplo, frente a la liberación de zonas o a las

⁵ “Plantado de Pruebas” es la denominación corriente para una de las prácticas ilegales usuales de la policía, que consiste en pretender encontrar drogas, armas u otros objetos incriminatorios que en realidad fueron colocados por ellos mismos al momento de realizar el operativo.

⁶ Respecto de las fluctuaciones de políticas y programas es preciso señalar que estrategias cuya implementación se considera imprescindible en un momento determinado, pueden desmontarse de un momento a otro a raíz del cambio de signo político de alguna de las administraciones involucradas. Esto, sin considerar

ocupaciones violentas mediante razzas u operativos, los programas deben cerrar sus puertas, limitar los horarios o desplegar estrategias específicas de protección a sus trabajadores. En otras oportunidades, la reacción de algunos programas es restringir sus intervenciones excluyendo situaciones que vinculan con los conflictos entre bandas delictivas. Pero también en otras situaciones los programas de inclusión social se constituyen en escenarios de protección para las y los jóvenes, en territorios neutrales que tratan de recortar el poder de agentes policiales y redes delincuenciales que actúan en zonas de coexistencia entre la legalidad y la ilegalidad. En efecto, sentidos sobre la justicia y recursos institucionales extraterritoriales –por ejemplo denuncias frente a abusos policiales– aparecen como estrategias movilizadas por los agentes estatales de programas de inclusión para proteger a niñas, niños y jóvenes.

Ahora bien, las trayectorias de las y los jóvenes por las distintas territorialidades construidas por los distintos actores que delinean formas de relacionamiento en los barrios populares exceden los derroteros propuestos por los programas. Como señalara Medan (en prensa), distintos proyectos disputan de modos alternativos el gobierno de los jóvenes de sectores populares. Sin entrar en esa tensión, se presentarán seguidamente algunas dimensiones inductivamente construidas para reflexionar sobre las múltiples formas que adopta la vulnerabilidad de niños, niñas y jóvenes de sectores populares a la violencia social.

VARIACIONES EN LA VULNERABILIDAD DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CAPTADA POR LOS PROGRAMAS

Niños, niñas y jóvenes constituyen las víctimas más frecuentes de los procesos de violencia social y aumento de la criminalidad, pero esta vulnerabilidad no se explica exclusivamente en razón de su edad. Según Crenshaw (1991) las divisiones sociales se expresan institucional, intersubjetiva, experiencial y relacionalmente. Involucran relaciones de poder y afectivas y son experimentadas subjetivamente como inclusión, exclusión, discriminación, aspiraciones e identidades. En tal sentido, las vivencias de desigualdades, violencia social y exclusión constituyen marcos subjetivos para el despliegue de trayectorias biográficas, trayectorias que emergen en la intersección entre

el impacto que estos movimientos de llegadas y partidas imprevistos puedan tener sobre las comunidades sobre las que supuestamente era necesario intervenir.

la determinación de la estructura social y su puesta en sentido en prácticas.

Desde otro punto de vista, autores como Saraví (2004) señalan que las trayectorias biográficas se despliegan en contextos de acumulación de desventajas sociales que motorizan situaciones de desafiliación o exclusión social. Dentro de esa acumulación de desventajas habría unas de carácter estructural, y otras dinámicas. Éstas últimas son eventuales y transitorias (pero pueden tener efectos permanentes) como las propias del contexto institucional, del espacio urbano, de las dinámicas familiares, y de los momentos de la trayectoria vital. Este contexto de determinaciones inespecíficas y lábiles desde el punto de vista de los sujetos, es difícilmente captado por los programas, cuyos límites de legibilidad se encuentran establecidos por sus objetivos y tipos de intervención, así como por las dimensiones interinstitucionales de su acción. En cierto sentido, parecería que esta dimensión social en la que se encuentran las determinaciones de los problemas para los cuales los programas se desarrollan, constituiría un tipo de margen, invisible para los programas que no obstante procuran oradarlo, en el cual se disponen “sujetos poco socializados” (Das & Poole, 2004). Las vidas de estos sujetos son gestionadas movilizando diferentes recursos que exceden o entran en complejas relaciones con los recursos y estilos de gestión biográfica propuestos por las agencias estatales.

Este aspecto ha sido señalado por autoras como Molyneux (2008), quien rearticulando la propuesta de Nancy Fraser sobre las políticas de interpretación de necesidades señaló que ciertos riesgos son ignorados por los programas, contribuyendo así a la construcción social de la vulnerabilidad. En la misma dirección, autoras como Tabbush (2009) han especificado el lugar de invisibilidad de la violencia contra las mujeres en la agenda de los programas sociales. Desde el punto de vista de los hallazgos preliminares de investigación, podemos decir que para algunos programas tales como los servicios de protección de derechos, los procesos de violencia social que constriñen o determinan las prácticas cotidianas en los barrios parecen constituir un margen ilegible para la acción estatal. En tanto otros programas –como los de inclusión social o incluso prevención social del delito– visibilizan la vulnerabilidad social de jóvenes, niños y niñas como asociada a las fallas en la inclusión institucional (a la escuela y el trabajo). Sin embargo, encuentran mayores dificultades para lidiar con la cotidiana inseguridad física vinculada con la naturalización de relaciones violentas al nivel local, en sus vertientes criminal, institucional, generacional y de género.

En otras palabras, el punto de vista de los programas construye la vulne-

rabilidad en vinculación con riesgos asociados con el delito y con la exclusión institucional de niños y niñas. No obstante, mantiene una relación conflictiva con las violencias sociales, que incluso se visualizan como potencialmente peligrosas para los trabajadores, y movilizan así afectos tales como el temor. La construcción de la alteridad vinculada con los jóvenes de sectores populares y su construcción como enemigos en los propios barrios, convergente con la naturalización de los relacionamientos violentos, constituye un problema no menor para las intervenciones de estos programas. Las y los vecinos no ven con buenos ojos el emplazamiento en los barrios de las oficinas de los programas destinados a jóvenes vulnerables, y tienen una relación compleja con la intervención policial que hostiga a sus destinatarios. En efecto, muchas veces la contempla con beneplácito en la medida en que se dirige a restringir los espacios de circulación para las y los jóvenes. En tal sentido, la intervención estatal es contradictoria y conflictiva, en tanto la acción de los programas de inclusión operaría resistiendo las prácticas sociales y estatales que parecerían querer tornar a los jóvenes, niños y niñas de barrios populares en víctimas justificadas de una violencia que se acerque al exterminio.

Medan (2013) halló en su trabajo que las distintas posiciones en las que estos jóvenes son ubicados por los programas se reconocen más o menos permeables a las influencias *negativas* del entorno –un entorno que, como se señaló, es multidimensional y no del todo inteligible para los programas. La lectura institucional concluye en que quienes “se rescatan”, esto es, quienes salvan sus vidas, se han “abierto” a la intervención estatal –del tipo que los programas representan y que se distancia de otras agencias como la policía– y además han contado con una familia *presente*. Además, estos y estas jóvenes, también desde el punto de vista de los programas, han logrado comprender lo perjudicial de ciertas influencias y las han repelido. Este grupo es el que, a su vez, permite demostrar la pertinencia y eficacia de la intervención. El segundo grupo logra ser interpelado por los programas, pero éstos ven su misión comprometida por la persistencia de las influencias *negativas* del entorno, tanto familiar como de pares. Especialmente la familia es una pieza clave en la posibilidad de lograr el *éxito* de la intervención, pues configura un espacio que oscila entre acompañar la misión institucional y obstaculizarla. Finalmente, en la forma que toma la tercera posición, el Estado –la parte que es representada por los programas de inclusión y prevención– ha perdido toda su capacidad de influencia. Por el contrario, priman las influencias *negativas* del entorno. En síntesis, las posibilidades de éxito de la misión estatal parecen directamente proporcionales a la incidencia de los programas y de la contención familiar *adecuada*, e inversamente proporcionales a las

influencias de un entorno que perciben como *negativo* pero que escapa de las posibilidades de legibilidad de la intervención estatal de inclusión social.

Parece posible sumarizar como sigue las dimensiones de variabilidad en las trayectorias biográficas de las y los jóvenes vista desde el ámbito de acción de los programas:

Redes y grupos. Según la perspectiva de los programas, no todas las familias se encuentran en posición de defender a sus hijos. Por su parte, las amistades en los barrios se tornan densamente peligrosas, y los noviazgos pueden exponer a las chicas a una gran vulnerabilidad. Estas tramas son problemáticas para los programas, porque por un lado sus propuestas apelan al fortalecimiento familiar y comunitario, a las potencialidades de las grupalidades, las redes y las culturas barriales, como depositarias de valores positivos. Sin embargo, esos valores pueden, según la situación, cambiar de signo para las y los agentes. En ese sentido los programas mantienen una actitud ambigua con las redes y los grupos, porque mientras a ellos se apela con la convicción de que fortalecen las capacidades y oportunidades de inclusión de niños, niñas y jóvenes, no todas las formas que adquieren estos espacios y actores son consideradas adecuadas. Además, la línea que distingue lo adecuado de lo perjudicial es muy difusa y usualmente se determina de modo coyuntural y en relación a la valoración personal de los agentes estatales.

Trayectos y desplazamientos. La circulación en los barrios y fuera de ellos es una actividad que dota de mayor visibilidad a los varones como posibles victimarios, y a las muchachas como posibles víctimas. A su vez, también observamos una actitud ambigua de los programas respecto a la movilidad de los y las jóvenes dentro y fuera del barrio. Mientras los programas se instalan en los barrios en los que viven los y las jóvenes para aumentar la participación de los mismos al evitarse la necesidad del traslado hacia una sede distante, reconocen que la falta de circulación por fuera del barrio de los jóvenes restringe sus oportunidades de inserción social, al circunscribirlos a un entorno no del todo auspicioso. Por otro lado, si bien tratan de estimular a los y las jóvenes para que se desplacen hacia afuera del barrio, en búsqueda de mayores oportunidades y aprendizajes, reconocen que sus vecindarios dotan de cierta seguridad -por ejemplo frente al hostigamiento policial- especialmente a los varones.

Momentos del curso de vida. Los programas asumen que su población destinataria atraviesa una etapa de la vida vulnerable, en la que especialmente los y las jóvenes se deberían diseñar sus “proyectos de vida”. Sin embargo, esta tarea parece obstaculizada por carencias relacionadas con la estructura de oportunidades materiales, pero especialmente con las del entorno vincular. A este escenario se adosa, la búsqueda de una identidad propia por parte de los y las jóvenes. Tensiones con la autoridad parental, búsqueda de prestigio asociado a la exposición al riesgo, particulares configuraciones de noviazgos, y maternidades y paternidades adolescentes son, a los ojos de los programas, situaciones que aumentan las vulnerabilidades de los y las jóvenes y condicionan sus trayectorias.

Dado este escenario, las intervenciones estatales se tornan, bajo ciertas circunstancias, recursos para los y las jóvenes. A su vez, les permiten, a partir de diferentes formas de participación en los espacios estatales, o alteraciones en las percepciones sobre el riesgo, el despliegue de estrategias que los y las alejan de los espacios en los que se concentran las mayores posibilidades de despliegue de violencia contra ellos y ellas.

CONSIDERACIONES FINALES

La construcción heterogénea de la alteridad con la que se asocia el temor al delito no obsta que jóvenes varones de sectores populares sigan constituyendo las figuras más estigmatizadas (Kessler et al., 2010). Tal como se ha podido observar recientemente, sobre dichas figuras es posible desatar una venganza social desaforada o bien una ausencia de indignación y reproche moral ante la violencia social desatada para con ellos, como en el caso Moreira, un aumento de la tolerancia motorizada por el desprecio. David Moreira, un joven de 18 años, fue brutalmente golpeado en la calle por “vecinos” al ser acusado de robar un bolso en Rosario, Argentina. Murió días después⁷.

La construcción diferencial del valor de las víctimas de violencia como dignas de duelo ha sido abordado entre otros por Judith Butler. En el extremo, la categoría del “homo sacer” (Agamben, 1998) aparece como una figura apropiada para dar cuenta de ciertas formas de violencia contra jóvenes, niños y niñas de sectores populares -por ejemplo de su asesinato-. Como señala la

⁷ <http://www.infojusnoticias.gov.ar/provinciales/murio-el-joven-lynchado-por-vecinos-en-rosario-como-en-el-medioevo-1488.html>

categoría, los asesinatos de estos jóvenes no constituyen un crimen, en tanto las prácticas sociales han construido a estos sujetos específicos como excluidos de la membresía social (Das & Poole, 2004).

Estos niveles de violencia, no suponen, tal como hemos querido mostrar, la ausencia de otros actores -institucionales o de la sociedad civil- que buscan hacerla descender o neutralizarla. Es posible intuir el rastro de intervenciones fallidas realizadas por instituciones que no lograron ganar la clientela a otros actores y prácticas sociales. No obstante, en el caso Moreira, un vecino o vecina que filmó el apaleamiento de David, entregó el celular a la justicia, lo cual permitió que dos de los victimarios fueran identificados.

Asimismo, desde los programas estatales que disputan su clientela con otros actores (Medan, 2013) en estos territorios en los márgenes, se construyen sentidos de justicia con los que se pretende reorganizar las prácticas sociales, sancionando como ilegales e ilegítimas estas situaciones. No se trata de procurar una épica de la resistencia, sino señalar que la pluralidad de actores que regulan estos territorios permiten, en sus contradicciones y tensiones, formas de sociabilidad y prácticas que están lejos de legitimar sin más la exclusión como desechables de niños, niñas y jóvenes. Si las experiencias de inermidad y lo infructuoso de las prácticas de inclusión constriñen enormemente la capacidad de las instituciones y prácticas estatales para constituirse en escenarios de inclusión social, no resulta legítimo desprender de ello que los márgenes estatales carecen de Estado y arrojan a sus habitantes a una para-legalidad de la que no pudieran salir.

REFERENCIAS

- Agamben, G. (1998). *Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life*. Stanford: Stanford University Press.
- Auyero, J. y Berti, M. (2013). *La violencia en los márgenes. Una maestra y un sociólogo en el conurbano bonaerense*. Buenos Aires: Katz Editores.
- CELS (2011). *Derechos Humanos en Argentina. Informe 2011*. Buenos Aires, Siglo XXI Editores.
- Crenshaw, K. (1991). Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color. *Stanford Law Review*, 43 (6).
- Das, V. y Poole, D. (Eds.) (2004). *Anthropology in the Margins of the State*. Santa Fe: SAR Press.
- Kessler, G., Svampa, M., y González Bombal, I. (coord.) (2010) *Reconfiguraciones del mundo popular. El Conurbano Bonaerense en la postconvertibilidad*. Buenos Aires.
- Llobet, V. (comp.). (2013). *Sentidos de la exclusión social. Beneficiarios, necesidades y prácticas en políticas sociales para la inclusión de niños y jóvenes*. Buenos Aires: Biblos.
- Medan, M. (2013). "Los sentidos del riesgo en programas para jóvenes". En Llobet, V. (coord.) (2013). *Sentidos de la exclusión social. Beneficiarios, necesidades y prácticas en políticas sociales para la inclusión de niños y jóvenes en el área metropolitana bonaerense*. Buenos Aires: Biblos.
- Medan, M. (en prensa). Distintos mensajes estatales en la regulación de la "juventud en riesgo". *Revista Astrolabio*. Universidad Nacional de Córdoba.
- Merklen, D., (2005). *Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática (Argentina, 1983-2003)*. Buenos Aires: Gorla.
- Molyneaux, M. (2008). The "neoliberal turn" and the new social policy in Latin America: how neoliberal, how new? *Development and change*, 39 (5), 775-797.
- Saraví, G. (2004). Segregación urbana y espacio público: los jóvenes en enclaves de pobreza estructural. *Revista de la CEPAL*, 83. Agosto, 2004, 33-48.
- Svampa, M. y Pereyra, S. (2003). *Entre la Ruta y el Barrio: La Experiencia de Las Organizaciones Piqueteras*. Buenos Aires: Biblos.
- Tabbush, Constanza (2009). "The possibilities for and constraints on agency: situating women's public and 'hidden' voices in greater Buenos Aires". *Journal of International Development*, 21, 868-882.